



IXª Conferencia Trinacional
del 7 al 9 de mayo, 2010

Coalición Trinacional para la Defensa de la Educación Pública

Declaración¹

Montreal, el 9 de mayo de 2010

Nosotros representamos al personal de la educación, miembro de los sindicatos de México, de los Estados Unidos y de Canadá, que están vinculados con la Coalición Trinacional para la Defensa de la Educación Pública. Nosotros coordinamos las actividades de defensa de la educación pública contra los efectos de la privatización y de la financiación estatal insuficiente, que se han acentuado al firmarse el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en 1994 y durante la crisis económica del 2008, a continuación de la cual los gobiernos aplicaron restricciones presupuestarias al sistema de educación. Consideramos que la financiación adecuada y equitativa de la educación pública es una responsabilidad de los Estados y no debe estar sometida a los riesgos de la coyuntura económica.

Constatamos, por nuestra experiencia y reflexión colectiva, que ni las políticas educativas nacionales, ni las inversiones, están a la altura para enfrentar los desafíos, en un mundo donde el acceso más amplio a la educación es más necesario que nunca.

Consideramos que es absolutamente necesario asegurar un financiamiento adecuado y equitativo de la educación pública. Hay que poner fin al sistema

¹ Esta declaración se inspira ampliamente en la declaración adoptada en el Foro Continental sobre la Educación, que tuvo lugar durante la segunda Cumbre de los Pueblos de las Américas, el 17 y 18 de abril 2001.

actual que favorece una escuela privada, accesible a las clases más adineradas, a expensas de una escuela pública con insuficiente financiación.

Tenemos la convicción de que hay que cambiar esta tendencia deplorable. Esto requiere una acción colectiva. Afirmamos que nuestros sistemas educativos necesitan importantes transformaciones democráticas. Vamos a continuar, a través de nuestras organizaciones, a trabajar sin descanso y solidariamente, para que se efectúen cambios que respondan a las necesidades y al bienestar del pueblo.

Afirmamos que la educación es un derecho social universal fundamental que comprende no solamente la formación general, sino también la formación profesional o técnica. Este derecho debe estar asegurado por un servicio público, bajo la responsabilidad del Estado y financiado por éste último. En consecuencia, combatiremos solidariamente las políticas comerciales y elitistas que rigen en muchos lugares de América del Norte y que conducen a un aumento en la privatización de la educación.

La educación no es una mercancía que sirve para enriquecer a las empresas. Los alumnos no son productos. Los padres de los alumnos y los estudiantes no son consumidores ni clientes de la educación. Los miembros del personal de la educación no son simples dispensadores de servicios. Nos oponemos firmemente a que la educación sea incluida en cualquier acuerdo sobre la liberalización del comercio de servicios. Nos oponemos a la comercialización de la educación y del conjunto de servicios públicos, a la utilización en la educación de un discurso comercial y a la voluntad de imponer como parámetro la relación costo/beneficio.

Proclamamos que una educación integral y accesible debe formar personas libres y críticas, ciudadanas y ciudadanos activos y comprometidos, respetuosos de la diversidad y de los derechos humanos, abiertos al mundo, preocupados por el futuro del planeta y de su desarrollo duradero y que hayan obtenido una comprensión crítica de la globalización. Que debe formar a mujeres y hombres que estarán preparados para la vida, al mundo del trabajo y al aprendizaje continuo más que a estar estrechamente entrenados en vista de un empleo particular.

Afirmamos que la formación de base, la formación profesional o técnica y la formación superior deben tener en cuenta las cuestiones de seguridad alimentaria, la agricultura sostenible, el desarrollo energético sostenible y la protección del medio ambiente, así como las cuestiones relativas a los derechos humanos, a la democracia, a las relaciones interculturales, al consumo responsable y al comercio equitativo, con la perspectiva de un futuro viable.

Defendemos una educación accesible, que sea un instrumento de justicia social y de emancipación de las personas durante toda su vida. Que prometa la igualdad entre las mujeres y los hombres, sean cuales sean sus orígenes étnicos, sus orientaciones sexuales, sus creencias u opciones filosóficas y sus capacidades de aprendizaje. Ella forma seres humanos que preferirán la colaboración y la solidaridad a la competición sin límites, que buscarán la paz, la resolución justa y pacífica de los conflictos y que se opondrán a la violencia y a la militarización.

Luchamos por una educación pública y gratuita, que sea plenamente accesible a todos los niveles de enseñanza y durante toda la vida. Estamos convencidos de que una educación de base obligatoria para todas y todos, tanto jóvenes como adultos, debería permitirles alcanzar un mínimo de once años de escolaridad. Rechazamos el proverbio que dice que el éxito de una gran cantidad es sinónimo de mediocridad. Afirmamos, por el contrario, que uno no podría lograr una educación de calidad sin democratización, sin la eliminación de las desigualdades.

Tenemos el propósito de combatir el racismo, la exclusión y la marginalización, que afectan a las minorías lingüísticas, religiosas y culturales, especialmente a los alumnos de las comunidades negras, indígenas y latinoamericanas. Afirmamos que los alumnos discapacitados o con dificultad de adaptación o de aprendizaje, los niños de la calle, trabajadores, o itinerantes deben tener acceso a servicios especiales que aseguren su escolarización. Por último, exigimos que se preste una atención especial a la educación rural y al respeto a la cultura campesina.

Apoyamos una visión de la educación de los adultos que garantice el derecho a la educación pública para toda la población adulta. Además, exhortamos a los gobiernos a crear las condiciones de una cultura de educación a lo largo de toda la vida, multiplicando las ocasiones para aprender en los medios de vida y de trabajo.

Nos oponemos a una concepción de la calidad estrechamente definida a partir de exámenes estandarizados y de otras medidas similares que tienen por efecto reducir la misión de la educación a lo que se puede medir fácilmente y que no tiene en cuenta las necesidades especiales de los estudiantes. Exigimos el retiro de esos exámenes que son utilizados como instrumentos de exclusión.

Tenemos el propósito de continuar contribuyendo a la elaboración de modelos y de acercamientos pedagógicos que respondan a las necesidades sociales, económicas y culturales de nuestros pueblos, que aspiren a reducir los fracasos, el abandono y la exclusión escolar. Favorecemos una gestión democrática de

la educación, en todos los niveles de la enseñanza y en todas las instituciones, basada en la participación del personal, de los estudiantes y de la comunidad.

Reconocemos la importancia de los servicios que vienen a apoyar la acción educativa en el ambiente escolar, así como el aporte educativo de otras instituciones (bibliotecas públicas, estaciones de radio y canales de televisión educativos). Reconocemos la contribución y la valorización de los participantes de los medios de educación popular y de la acción comunitaria.

Afirmamos la necesidad de una enseñanza pública superior accesible, gratuita y de calidad, que sea respetuosa de la libertad académica, de la libertad académica y de la autonomía institucional de las universidades y que garantice que las investigaciones sean al servicio del desarrollo de la sociedad y que no estén sujetas a las necesidades y requisitos de las empresas privadas.

Creemos en una educación laica respetuosa de las creencias religiosas y filosóficas, del derecho a la secularización, a la libertad de conciencia y a la igualdad.

Apoyamos la lucha de las naciones autóctonas y de los pueblos indígenas que exigen un control de sus instituciones educativas a fin de asegurar el respeto y la promoción de sus lenguas, de sus culturas y de su herencia, y de una educación que valore y difunda la diversidad étnica así como la pluralidad cultural y lingüística. La educación pública debe integrar la historia y a la cultura de estos pueblos y el personal debe estar formado en ese sentido.

Reconocemos la importancia que tiene para las comunidades lingüísticas nacionales minoritarias el ejercer el control de sus instituciones educativas a fin de asegurar la difusión y la promoción de su lengua y su cultura.

Exigimos el respeto de los derechos sindicales, incluyendo los derechos a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. Vamos a continuar a luchar por el reconocimiento de la autonomía profesional del personal de la educación, para que obtenga un salario justo que reconozca la naturaleza de su trabajo y que le permita vivir dignamente, así como por condiciones de jubilación adecuadas. Vamos a continuar nuestras luchas por una mejora de las condiciones de trabajo, de la enseñanza y del aprendizaje. Exigimos normas de salud y de seguridad que garanticen una protección adecuada del personal y de los alumnos y que se concreten dentro de un código de salud para la educación pública.

Denunciamos la situación de desigualdad vivida por las mujeres que componen la gran mayoría del personal de la educación. Ellas deben recibir beneficios de

protección de maternidad adecuada. Nos comprometemos también a luchar contra toda forma de discriminación relacionada al empleo.

Afirmamos que los cambios necesarios para una educación democrática exigen una formación inicial sólida del personal de la educación, así como una formación continua gratuita y accesible a todos y todas.

Reconocemos la importancia de una utilización eficaz de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), con fines educativos, que respondan a las necesidades y prioridades identificadas por la comunidad y no por los intereses comerciales. Favorecemos, en particular, la creación de una red, con el propósito de compartir los conocimientos y la difusión de una cultura de trabajo en colaboración. Llamamos la atención sobre los riesgos relacionados a una utilización restringida de los TIC, y sobre las prácticas que tratan de eludir la soberanía nacional en educación. Nos oponemos de este modo a una utilización de la educación virtual y a distancia como sustituto a una educación directa y de calidad.

Para terminar, reafirmamos con convicción que la educación es un derecho, no un privilegio. La democracia a la que aspiramos está hecha de igualdad, de libertad para todos y de solidaridad. Ella se basa en la dignidad de la persona, en las buenas condiciones de vida, en el respeto de los derechos políticos, económicos, culturales, ambientales y sociales de todas y de todos.